



3.- Debates sobre el socialismo del siglo XXI

Por una estrategia de transformación social

Michel Husson

El punto de partida debe ser la comprensión del modo de funcionamiento actual del capitalismo. Esencialmente, es un capitalismo que aumenta de forma tendencial la tasa de explotación (y por consiguiente, la rentabilidad) y se niega a responder a las necesidades sociales no rentables. Asegura su reproducción de dos maneras: por medio de una distribución cada vez más desigual en todos los países, y por una estructura de acumulación cada vez más desequilibrada a nivel mundial. Estas características conducen a un diagnóstico contradictorio: por un lado, el capitalismo triunfa, porque se libera de todas sus trabas y obtiene ganancias muy elevadas. En este sentido se trata de un capitalismo “puro”. Pero, por otro, está el fenómeno relativamente inédito de un capitalismo que realiza enormes beneficios pero invierte poco: no tiene otra forma de usar su ganancia que distribuyéndola en forma de dividendos. Este rasgo ha sido subrayado por economistas que no tienen nada de anticapitalistas, y Patrick Artus llega a hablar de capitalismo “sin proyecto” /1. Se puede extender esta constatación al ámbito de las relaciones sociales, porque el capitalismo admite hoy día que no está hecho para satisfacer las necesidades sociales: aparece desprovisto de la legitimidad social que habría podido adquirir con un reparto menos desigual de las rentas y un casi pleno empleo.

Esta situación es resultado de una ofensiva neoliberal, apoyada en dos palancas principales -la competencia y el paro masivo- para modificar a fondo no sólo el reparto de las riquezas creadas, sino la forma misma de las relaciones sociales capitalistas. La estrategia seguida ha tomado la forma de un movimiento continuo de regresión sin límites. Se trata de una estrategia de desequilibrio de los “modelos sociales”, donde cada avance pide otros nuevos: su punto de llegada no es la puesta en pie de nuevos compromisos estables. Por ello se considera siempre que el avance de las contrarreformas es demasiado lento o poco profundo, en la medida en que

1/ Artus, P. y Virard, M.P. (2005). *El capitalismo está autodestruyéndose*. París, La Découverte.

los gobiernos burgueses intentan no desencadenar enfrentamientos generalizados por ir demasiado rápido o golpear demasiado duro. A nivel internacional, la desregularización hace inoperante, por definición, cualquier medida de conducción de los mecanismos económicos. Instituciones como la OMC han sido concebidas sobre todo para liberalizar la economía mundial y no pueden tener otros objetivos.

El trabajo de zapa del reformismo

El primer efecto de esta coyuntura ha sido restringir el campo del reformismo clásico. Su crítica del capitalismo contemporáneo -que podría llamarse keynesiana- se vuelve inoperante, porque subestima la amplitud de las transformaciones en curso, limitándose a la denuncia de las finanzas. Su excesivo peso llevaría al bloqueo de los salarios, y en consecuencia, del crecimiento y el empleo. Este análisis se base en Keynes, pero aún más en Kalecki quien había desarrollado desde 1943 la idea de que rentistas y empresarios podría aliarse para eliminar los aspectos desfavorables, desde su punto de vista, del pleno empleo ².

El tipo de interés, el presupuesto y la fiscalidad serían por tanto los principales instrumentos de una política alternativa. Bajar el tipo de interés restablecería el dinamismo de la acumulación; aumentar los gastos públicos y profundizar el déficit relanzarían la demanda; los impuestos sobre las rentas financieras desanimarían la especulación. El keynesianismo es coherente, en el sentido de que sus recetas se adaptan al diagnóstico realizado. El problema es que este diagnóstico no va a la raíz de las cosas.

Se presupone que el débil mecanismo de la acumulación es resultado de la depreciación financiera, y bastaría con eliminarla para que el capitalismo reencontrara “proyectos”. Es un total contrasentido porque las finanzas no son ningún obstáculo al funcionamiento “normal” del capitalismo: permitiendo a los capitales circular libremente, contribuye a la competencia entre los trabajadores a escala mundial. Participa así en la constitución de un mercado mundial con unas elevadas normas de competitividad, descartando las demandas que no son rentables. No estamos por tanto en presencia de un capitalismo gangrenado por las finanzas, sino de un capitalismo puro, liberado de sus trabas, en gran parte gracias a la financiarización.

Las soluciones keynesianas son inoperantes, porque ignoran la crisis sistémica de un capitalismo que reivindica abiertamente su incapacidad para responder a las necesidades más urgentes de la población mundial. Además, los tipos de interés han bajado mucho, sin que por ello se relance la economía europea. Han aumentado los déficits presupuestarios, aunque por malas razones, a causa de la caída de impuestos que benefician a los ricos y les procuran por añadidura una verdadera renta de Estado. En fin, el himno al crecimiento como única respuesta al paro olvida cualquier consideración sobre su sostenibilidad ecológica y la intensificación de trabajo que conlleva.

² Kalecki, M. (1971) “Aspectos Políticos del Pleno Empleo”, *Political Quarterly*, 1943; reproducido en *Ensayos Escogidos sobre las Dinámicas de la Economía Capitalista*, Cambridge University Press.

Y lo más importante, la “crítica keynesiana” invierte fines y medios. Sus elaboraciones de tipo programático se centran en los instrumentos (presupuesto, crédito, tipos de interés, etc.) que bastaría activar para lograr una mejor conducción de las políticas macroeconómicas y así resolver espontáneamente los problemas sociales, en particular el del empleo. Los keynesianos conceden un papel clave al crecimiento, sin cuestionar su contenido, no sólo por razones ecológicas, que ya de por sí serían suficientes. La creencia ciega en la posibilidad y virtudes de un crecimiento más rápido no tiene en cuenta la verdadera razón de la débil acumulación de capital, no debida a a políticas macroeconómicas inadecuadas sino al funcionamiento de un capitalismo hipercompetitivo que prefiere no satisfacer bloques enteros de necesidades sociales antes que hacerlo en condiciones de rentabilidad menos interesantes.

El radicalismo neoliberal requiere en cambio una crítica radical, que tome por objetivo los fundamentos mismos del capitalismo: la explotación y la propiedad privada. Este radicalismo no se opone al keynesianismo sino que lo engloba en un proyecto mejor calibrado /3. El déficit presupuestario preconizado por los keynesianos debe ir acompañado de una fiscalidad excepcional sobre las fortunas para poder enjugar la deuda pública. El descenso de los tipos de interés debe ser puesto al servicio de la decisión de reducir el tiempo de trabajo como forma privilegiada de redistribución de las ganancias de productividad. El control de los flujos financieros debe completar la defensa y la promoción de los servicios públicos en torno a la idea de apropiación social. En resumen, hay que dejar de confundir los fines con los medios, y de creer que el buen uso de los instrumentos de la política económica dispense de instaurar una verdadera democracia social.

La paradoja keynesiana

Los límites del programa keynesiano no implican que esté completamente privado de coherencia. Los efectos de la mundialización capitalista no eliminan los márgenes de maniobra de los Estados (y aún menos a Europa como tal). Hay que distinguir estas dos cuestiones: la existencia de márgenes de maniobra y las condiciones para su movilización efectiva. Hoy en día, los márgenes de maniobra son considerables, a condición de restablecer la parte de los salarios al nivel anterior al giro liberal de los años 1980. Dicho desplazamiento equivaldría en un quinquenio a más de 2,5% de crecimiento de la productividad anual, y al 4,5% si se añaden los aumentos “normales”. Este potencial permitiría financiar el aumento de 1.200 € en las ayudas sociales mínimas, un avance general de los salarios, el paso a las 32 horas y el aumento de los gastos de la Seguridad Social en proporción a las necesidades /4.

Esta cuestión ha sido planteada desde la llegada al poder de la izquierda en Francia en 1981. Los expertos de izquierdas sometieron entonces el “Programa Común” a la prueba de modelos de previsión: mostraron que un relanzamiento salarial desequilibraría la balanza comercial y deprimiría la inversión. De esta constatación se podían sacar lógicamente dos conclusiones: o el programa no era viable, o había

3/ Véase *El gran bluff capitalista*, La Dispute, 2001. <http://hussonet.free.fr/bluff.pdf>.

4/ Para una demostración más detallada, véase <http://hussonet.free.fr/coppov.pdf>.

que acompañarlo de medidas estructurales. Los previstos efectos perversos podían ser neutralizados, por ejemplo, con una devaluación previa y la utilización de los bancos y empresas nacionalizadas para sostener la inversión.

La discusión sobre si había que devaluar dividió al PS desde su llegada al poder. Se impusieron los “realistas” sobre los “albaneses”, favorables a esta medida: no se podía concebir un mensaje tan negativo a la “comunidad financiera”. En cuanto a la utilización del nuevo sector nacionalizado para impulsar la economía, también fue abandonada a cambio de “contratos de plan” muy poco exigentes. Se llevó a cabo el relanzamiento, sin medidas eestructurales; y ocurrió lo que había sido previsto por los modelos: déficit creciente, caída del franco y doble devaluación defensiva, mientras los empresarios llevaban a cabo una huelga de inversiones y una huida de capitales. La consecuencia, o dicho de otra manera, el giro hacia la austeridad y el social-liberalismo, era previsible. Todo esto relativizó el argumento de Mitterrand de reinstalar a la izquierda por un largo período de tiempo: apenas duró unos meses.

Tomando ejemplos más recientes, abordaremos tres hechos destacados de la práctica gubernamental de la izquierda plural francesa entre 1997 y 2002, que representan otras tantas ocasiones perdidas que hicieron pagar caro a Lionel Jospin en las presidenciales de 2002. En 1997, Lionel Jospin había prometido garantizar el estatuto público de France Télécom y llegó a participar en una manifestación en su defensa; algunos meses más tarde, ya en el gobierno, decidió abrir el capital de la empresa, o mejor dicho, iniciar un proceso de privatización.

Algo más tarde, el gobierno descubrió que disponía de un “sobrante” presupuestario debido a la inesperada recuperación de la actividad. En invierno de 1997 se desarrolló un movimiento de parados reivindicando un aumento de las ayudas sociales mínimas, equivalente a unos 28.000 millones de euros. En febrero de 1998, Lionel Jospin explicaba de forma cínica que los franceses no entenderían esta aumento, dando por buenas las imágenes más reaccionarias del paro masivo. Apenas dedicó un millar de millones de euros a mejorar la suerte de los seis millones de parados y beneficiarios de subsidios mínimos.

Tercera cita: en setiembre de 1999, el grupo Michelin anunciaba, con pocos días de intervalo, unas respetables ganancias y un plan de “supresión de empleos” (para no utilizar la palabra maldita: despidos). En esta ocasión, Lionel Jospin pronunció una frase terrible: “*El Estado no lo puede todo*”, que venía a decir a los asalariados que no podían esperar nada de su gobierno. Podrían multiplicarse los ejemplos: Lionel Jospin habría podido aumentar las cotizaciones patronales por jubilación en vez de poner en marcha el ahorro salarial, preparando el terreno a los planes de pensiones. El paso a las 35 horas habría podido ser más gravoso para los empresarios y menos desfavorable para los asalariados, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y salario. En cambio, Jospin consiguió la proeza de transformar las 35 horas en una medida anti-obrera.

La pregunta es por qué los supuestos socialdemócratas no llevan a cabo políticas socialdemócratas. Podría ampliarse la cuestión a escala europea, porque en el mo-

mento del Tratado de Amsterdam y la Cumbre de Barcelona, una mayoría de gobiernos con esta etiqueta confirmaron y profundizaron la orientación liberal de la construcción europea. Hay que comprender la respuesta que dan Jospin y Cía. No hay en realidad márgenes de maniobra para otra política, dicen, porque “estamos en una economía mundializada”. El programa de Lionel Jospin para las presidenciales de 2002 expresaba muy bien la necesidad imperiosa de pasar de la social-democracia al social-liberalismo /5. Dicho a la manera de Alain Lipietz, habría que hacer la revolución para poder transformar la sociedad; pero esta gente no quiere la revolución, por tanto: ¡fuera la transformación social y viva el social-liberalismo! Como se trataba de demostrar.

A primera vista, los revolucionarios deberían estar de acuerdo con esta idea: fuera de la revolución no hay salvación. Pero esta postura es más *revolucionarista* que radical. En primer lugar, en cierta medida da la razón a Jospin. Si la *revolución* fuera la única alternativa, y si no está de actualidad, no se le puede reprochar que se someta a la necesaria “modernización”. Pero hay que rechazar de forma categórica esta interpretación y afirmar que son posibles otras opciones, o dicho de otra forma, hay que empezar a discutir sobre la “viabilidad económica” de un programa alternativo. Recordemos los momentos citados. No se puede discutir, incluso y sobre todo desde un punto de vista revolucionario, que había otras opciones posibles: Jospin podía conservar la salud de France Télécom, podía aumentar significativamente las ayudas sociales mínimas y podía imponer a Michélin el mantenimiento de los empleos.

Dicho de forma más general, se trata de invertir el reparto de las rentas a favor de los asalariados. El discurso dominante, que los social-liberales asumen como propio, decreta que eso es imposible, por culpa de la competitividad: se repite la invocación ritual a la mundialización. Pero el argumento no se sostiene: en un proyecto radical, el progreso de los salarios se compensa con una baja de las ganancias financieras, y no se ve la razón por la que el hecho de pagar dividendos sea económicamente razonable mientras que aumentar los salarios no lo sea. Se nos dice que los capitales y sus poseedores abandonarían el territorio. Pero este argumento ya no es económico. Viene a decir que los poseedores no se dejarán desposeer cómodamente y resistirán con sus propios medios, sirviéndose por tanto de la pura economía.

Las cosas van más lejos, porque los gobiernos de izquierda no se limitan a acompañar al movimiento, sino que lo preceden, y no hay mejor ejemplo que la furiosa política de “reformas” que SPD y Verdes alemanes pusieron en marcha, antes de ceder el relevo a una “gran coalición”. Esta alternancia burguesa contribuye al ascenso de la abstención, la extrema derecha y los integristas. En conclusión: si los reformistas sólo hacen “contrarreformas”, no es por falta de alternativas, sino por una opción mucho más política que tiene que ver con el grado asumible de enfren-

5/ Husson, M. (2002). “El programa de transición de Lionel Jospin”. *Critique Communiste*, nº 166, primavera 2002. <http://hussonet.free.fr/pjospin.pdf>.

tamiento con la patronal y con una alianza privilegiada con las clases medias, como sustituto a la pérdida de credibilidad entre las clases populares.

Anatomía del “revolucionarismo”

Una salida programática debe evitar dos escollos: la adaptación a las “imposiciones económicas” y el exceso sistemático de exigencias, que puede calificarse de “revolucionarista”. Esta última posición se basa en dos postulados que tienen en común la incompreensión de la dialéctica entre programa y movilización. El primero es pensar que las consignas más exigentes son el medio para suscitar una movilización más importante y radical. El mejor programa es, desde ese punto de vista, el que pone la barrera lo más alta posible, y coloca, por ejemplo, a la expropiación en el mismo plano que las reivindicaciones más inmediatas. Este postulado condensa varios errores. Plantea que algunas consignas serían por esencia anticapitalistas y empujaría la toma de conciencia, más allá que las reivindicaciones simplemente anti-liberales. Pero ni el aumento de los salarios, ni la armonización de los derechos sociales y democráticos, ni la renovación de los servicios públicos, ni siquiera la reducción del tiempo de trabajo, son en sí mismas medidas anticapitalistas. Se puede considerar que una ley que prohíba los despidos en empresas con beneficios ataca al poder patronal, pero no equivale en absoluto a un cuestionamiento global de la propiedad privada.

El segundo error consiste en negarse a responder a objeciones consideradas de forma implícita como burguesas. Se nos dice: si se aplica vuestro programa, por ejemplo, el aumento de salarios, haréis caer la competitividad de la economía y perder empleos. La postura *revolucionarista* consiste en responder que esta cuestión no nos concierne, porque rechazamos la lógica capitalista de la competencia a ultranza. Es no es falso en sí, pero este tipo de respuesta es abstracta y no tiene en cuenta la temporalidad de la transformación social. Nos privamos del argumento decisivo de que la competitividad no se vería afectada si se compensan los aumentos de salarios con el descenso de las rentas financieras. Este contraargumento tiene el interés de responder a la objeción, señalando las resistencias que habrá que combatir por parte del “muro del dinero”. En el movimiento sobre las pensiones se vio necesaria esta valoración alternativa, para convencer a la opinión sometida a la propaganda liberal de que era posible financiar el sistema por medio del reparto y preservar así sus valores de solidaridad. No es posible oponerse a una contra-reforma si no se dispone de ningún argumento para refutar el tópico liberal del “no hay alternativa”.

Nuestra hipótesis estratégica debería basarse más bien en este principio: al luchar con decisión por reivindicaciones justas (que sin embargo no tienen un contenido anticapitalista intrínseco), al enfrentarnos a las resistencias y los sabotajes, se puede hacer emerger un punto de vista anticapitalista masivo, la comprensión de que hay que cuestionar radicalmente el modo de funcionamiento del capitalismo para obtener la satisfacción de derechos fundamentales: al empleo, a la salud, etc. No por pedir la luna se convencerá mejor a los trabajadores para que entren en el movimiento, sino señalando los obstáculos concretos y reales que se oponen a la plena satisfacción de sus necesidades.

El segundo postulado *revolucionarista* es el de la instantaneidad. Es cierto que el trabajo de propaganda revolucionaria es una obra de largo aliento. Pero llega un momento en que concluye: es la revolución, la que da paso sin transición a otra sociedad y a otra economía. Este esquema está desprovisto de verosimilitud porque se basa en la hipótesis de una brusca inversión de las relaciones de fuerza ideológicas y políticas. El escenario imaginable es bastante diferente: comienza por el acceso al poder de un gobierno que toma en un primer momento medidas de transformación social. Se abre entonces un período de enfrentamiento en el que se van a oponer la resistencia de los dominadores y la voluntad de los dominados por defenderse y extender las primeras medidas de transformación social. En el curso de esta fase aparecerá la necesidad de ir más lejos y de cuestionar los principios fundamentales del sistema. Ésta es sin duda la hipótesis estratégica fundamental: las reformas realmente anti-liberales sólo pueden ser perpetuadas por medio de medidas anticapitalistas.

Por una estrategia europea de extensión

La “crítica keynesiana” tiene otro punto débil en sus respuestas a la mundialización. Imagina formas de proteccionismo, a nivel nacional o extendidas a una especie de “euro-proteccionismo”. Coinciden a veces con la voluntad de delimitar un núcleo duro europeo, o una Europa de varias velocidades, para poder preservar los modelos sociales más avanzados en competencia con los países menos avanzados socialmente. Esta tentación soberanista está muy extendida porque parece aportar una respuesta inmediata y concreta a los efectos de la mundialización. Suele entrar en resonancia con el paradigma keynesiano, porque el proteccionismo aparece como el medio para dar más libertad a la intervención del Estado. La expresión “patriotismo económico”, recién aparecida en Francia, subraya la naturaleza profunda de estos proyectos. No cuestionan el principio de competencia, sino que proponen medidas para restablecer un control nacional sobre las condiciones de esta competencia.

La óptica de la transformación social se basa en un análisis diferente de la regresión social, cuya causa principal no es la pérdida de importancia de la intervención del Estado debida a la mundialización. Para subrayar mejor las diferencias, podemos tomar de los economistas oficiales la útil distinción entre políticas cooperativas y no cooperativas. Una política cooperativa es una política que triunfa tanto más si se extiende al conjunto de una zona económica (o del mundo entero). Una política no cooperativa, por el contrario, sólo triunfa si es unilateral. La construcción europea proporciona numerosos ejemplos de esta oposición. Se extiende al conjunto de la Unión lo que en Francia se llama “desinflación competitiva” y que consiste, en líneas generales, en bajar los salarios para ganar partes de mercado. Esta política tiene un sentido, hasta cierto punto, si un país consigue ganar de esta manera partes de mercado en detrimento de otros países. Pero resulta desastrosa si se lleva a cabo por varios países al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre en Europa, donde los efectos de la congelación salarial y el ahogo de la demanda interior se ven reforzados por la generalización de estos preceptos. El ejemplo

límite es el de Alemania, que ve crecer rápidamente sus exportaciones mientras se restringe su mercado interior y el paro no deja de aumentar.

Una política cooperativa funciona según principios contrarios. Si, por ejemplo, un país lleva a cabo una experiencia de reducción masiva del tiempo de trabajo, se tropezará con los efectos de la competencia, perdiendo partes de mercado. Pero si esta política se generalizase a un número significativo de países, se desplegarían los efectos positivos de esta política, sobre todo para el empleo, porque los efectos de competitividad habrían sido neutralizados por la extensión de la medida.

Sólo se puede salir de esta contradicción con una estrategia de extensión que en pocas palabras puede resumirse así. Primer tiempo: un país toma unilateralmente medidas de transformación social. Segundo tiempo: adopta las medidas necesarias para su protección. Tercer tiempo: propone la extensión de estas medidas, haciendo superfluas las medidas de protección. Esta presentación requiere algunos comentarios. En primer lugar, una estrategia europea no puede depender de la construcción acabada de una "buena" Europa. O nos tropezaremos con un sofisma resignado: nada es posible por culpa de la Europa liberal, queremos hacer Europa, comencemos por edificar un marco europeo en el que sea posible llevar a cabo otras políticas armonizadas. Como la tarea de construir la casa empezando por el tejado parece con toda razón fuera de alcance, entonces viene el repliegue a las luchas locales.

No se puede esperar a que la transformación se ponga en marcha al mismo tiempo en varios países, aunque esto sería lo deseable. Más vale trabajar con la hipótesis de un movimiento que comienza en un determinado país. En este caso, son ineludibles las medidas de protección. Pero hay que caracterizar a este proteccionismo: cada vez que se habla de proteccionismo, hay que preguntarse qué se está protegiendo. No se trata aquí de proteger los intereses del capital nacional (que será puesto a dura prueba) sino de proteger una experiencia de transformación social contra sus adversarios, tanto interiores como exteriores. Este proteccionismo es un proteccionismo cooperativo y transitorio: no tiene vocación de perdurar y se justifica mientras los otros países no se comprometan a su vez en experiencias similares.

El tercer tiempo corresponde a un llamamiento a los pueblos de los otros países a comprometerse en la misma vía, porque se trata, lo decimos una vez más, de una política cooperativa que se refuerza con su extensión. Un gobierno que se comprometa en esta vía y que dé muestra de su capacidad para cambiar la vida tendría legitimidad para dirigir un llamamiento semejante. Se beneficiaría también de una relación de fuerzas reforzada a la hora de justificar e imponer sus márgenes de maniobra frente a los gobiernos liberales de los otros países. Esta legitimidad podría ser aún mayor por una redefinición unilateral de las relaciones Norte-Sur sobre una base cooperativa, rompiendo con las relaciones de dominación.

Las condiciones de la alternativa

El programa esbozado aquí es coherente y económicamente viable. Coherente, porque une el análisis del paro como contrapartida de la captación por parte de los ren-

tistas de las ganancias de productividad y los remedios propuestos, que consisten en apropiarse de las rentas financieras a favor de la creación de empleos. Es viable, porque las rentas financieras son económicamente estériles (no se invierten) y socialmente perjudiciales, porque engendran desigualdades, precariedad y miseria. Pero esto no basta, es evidente. Cualquier intento de poner en marcha esta redistribución de las riquezas se enfrentará a la resistencia furiosa de los poseedores, que no dejarán de invocar las “leyes de la economía” para proteger sus intereses.

La parte más difícil de cualquier avance programático no es por tanto el enunciado de las medidas a adoptar, sino la definición de las políticas que permitan neutralizar los comportamientos de obstrucción, represalia, incluso sabotaje, a las que tendría que hacer frente un proyecto de transformación social. Es iluso pensar en evitarlo a base de modalidades hábiles para alcanzar el objetivo deseado. Se pueden imaginar los medios más sofisticados y retorcidos de aumentar los salarios y los gastos sociales, pero la patronal sabe contar: se opondrá, por ejemplo, a cualquier aumento de las cotizaciones sociales, ya sea por una subida de las tasas o una ampliación de la base cotizable. En el fondo no hay más que un medio para evitar este cara a cara: renunciar al cambio. Así podemos comprender la paradoja del social-liberalismo. Lo repetimos: su incapacidad para abordar verdaderas reformas no se explica por la falta de margen de maniobra, sino por el rechazo a un enfrentamiento que no está dispuesto a asumir.

La coherencia de este proyecto no deriva de una aceptación de las leyes del capitalismo neoliberal. Al contrario, se basa en una ruptura radical articulada con estos principios. Radical, lo que quiere decir ir a la raíz de las cosas, situando correctamente las fuentes del paro y de la inseguridad social en el corazón mismo de la relación capital-trabajo. Hay que cuestionar los dos grandes tabús: el reparto actual de las rentas y el derecho de propiedad capitalista. El aumento de los salarios y de las rentas sociales sólo se puede hacer a costa de las rentas financieras. La prohibición de los despidos sólo se puede conseguir poniendo en cuestión el libre arbitrio patronal. El paso a las 32 horas bajo control de los trabajadores sólo se puede hacer en oposición frontal a la intensificación y la precarización del trabajo. Si el gobierno de la izquierda plural hubiera adoptado medidas significativas en cada uno de estos terrenos, en lugar de dar marcha atrás al más mínimo temblor de los mercados, habría conquistado un electorado popular que tendría la impresión de ver defendidos sus intereses. Estos avances habrían deslegitimado la Europa reaccionaria de Maastricht y Amsterdam y habrían permitido la construcción de otra Europa, fundada en la satisfacción de las necesidades sociales. El repliegue reaccionario a una concepción *vichysta* de la Nación habría quedado privado de credibilidad como método de resistencia a la regresión social.

Existen márgenes de maniobra. El problema está en la capacidad para hacerlos disponibles. Dicho de otra manera, la viabilidad económica de un programa alternativo reside en una modificación radical del reparto de las rentas. Pero esto va a suscitar resistencias por parte de capas sociales, reducidas pero poderosas, que se

benefician del actual reparto. Se puede describir al capitalismo contemporáneo como dominado por un arbitraje entre crecimiento, empleo y paro, por una parte, y reparto de rentas por otro. Esta proposición se apoya en la comparación de los países europeos en la última década: aquellos en que la parte de salarios está estabilizada o incluso ha aumentado ligeramente, han tenido una tasa de crecimiento superior a aquellos donde la parte de los salarios baja.

También es un teorema formalizado por la teoría de las tasas de paro de equilibrio. La idea es que no se puede descender por debajo de este paro de equilibrio sin desencadenar un exceso de inflación que funciona como llamada al orden, haciendo remontar la tasa de paro a su valor de equilibrio. De esta teoría se derivan políticas europeas que se dan como objetivo no el bajar la tasa de paro, sino aumentar la tasa de empleo. Se trata de crear empleos, a condición de hacer progresar aún más rápidamente el número de los que se incorporan al mercado de trabajo y mantener así la presión ejercida por lo que Marx llamaba el “ejército industrial de reserva”. Esta tasa de paro de referencia es también denominada NAIRU (*non accelerating inflation rate of unemployment*): la tasa por debajo de la cual se activa la inflación. Pero si se miran más de cerca las formulaciones teóricas, se descubre que se trata también de una teoría de la tasa de margen de equilibrio (una buena aproximación a la tasa de explotación): tanto más elevada cuanto más lo es la tasa de paro, y más elevadas las ganancias de productividad, a condición de que no repercutan plenamente sobre los salarios. Se tiene una visión bastante fiel de las reglas de funcionamiento de un capitalismo que pretende maximizar la tasa de explotación manteniendo la presión que el paro masivo ejerce sobre los salarios, así como desconectar el progreso de éstos y los aumentos de productividad.

Al proponer modificar el reparto del valor añadido, o dicho de otra forma, bajar la tasa de explotación, se choca directamente con intereses sociales que han conseguido hacer de la defensa de sus privilegios una especie de ley económica, y en todo caso una regla de conducción de los capitalismos contemporáneos. Nos encontramos enfrentados a una doble tarea de explicación. Se trata en primer lugar de una lucha ideológica contra este disfraz de intereses sociales bajo la forma de leyes intangibles. Pero se trata sobre todo de explicar que la viabilidad de un programa alternativo sólo puede encontrarse en un enfrentamiento frontal en el terreno social y político. En esto reside el límite fundamental del reformismo de inspiración keynesiana: no sólo en sus límites programáticos ya señalados, sino en su negativa a proyectar el enfrentamiento a un grado adecuado. La razón principal de que los social-liberales no utilicen los márgenes de maniobra realmente existentes es precisamente que rechazan el grado de enfrentamiento que serían necesario para disponer de ellos.

Estas consideraciones tienen importantes implicaciones estratégicas. En primer lugar, un proyecto de transformación social debe evaluar cuidadosamente el grado de enfrentamiento necesario para hacer triunfar su programa. Desde este punto de vista hay que evaluar la pertinencia: no depende de la argumentación técnica sobre

los instrumentos a utilizar. Muchos debates que recorren hoy en día al movimiento social tienen la ilusión de descubrir hábiles medidas que sustituyan al enfrentamiento social. La financiación de la Seguridad Social es representativa de este defecto: entre las propuestas avanzadas, muchas van acompañadas de la falsa idea de que permitirían evitar dicho enfrentamiento. Por ejemplo, sería más fácil hacer tributar las rentas financieras que aumentar los salarios o las cotizaciones.

Hay que dotarse de las condiciones previas para no hundirse en las experiencias sociales-liberales que se esconden ante las “presiones económicas” al menor fruncido de ceño de la burguesía, rechazando el llamamiento al apoyo popular. Pero tampoco hay que quedarse en anunciar de antemano la necesidad de este apoyo. Después de todo, las masas no tienen una propensión espontánea a bajar a la calle y hay que respetar la dialéctica particular de movilización social. No están dispuestas a pelear por medidas futuras cuyo efecto inmediato no se percibe. De ahí la necesidad de medidas de urgencia, tomadas en las primeras semanas de ejercicio del poder, que cambien concretamente la vida de la mayoría. En el período de enfrentamiento que está entonces abierto por la burguesía, la palanca es el apoyo a estas medidas ya tomadas, que tienen efectos perceptibles. Se trata por tanto de la rápida construcción de una nueva legitimidad social, fundada en la satisfacción de las necesidades sociales más urgentes, que hay que defender contra las operaciones de resistencia y de sabotaje de los poseedores. Las medidas tomadas deben estar concebidas para aislar a esta reducida capa social.

Esta perspectiva de ruptura radical sintetiza las enseñanzas de las luchas sociales y de las experiencias gubernamentales abortadas en los últimos años. Hay que hacerla fructificar, anclarla aún mejor, evitando una doble tentación: degradarla con el mimetismo de los camaleones social-liberales, o envolver el programa en celofán para preservar la pureza revolucionaria. Este proyecto de transformación social debe convertirse, en las elecciones y las luchas, en la referencia y la expresión de quienes verdaderamente quieren cambiar esta sociedad. En torno a esta coherencia debe construirse la izquierda radical frente a un reformismo sin reforma que no consigue otra cosa que preparar el terreno para las “reformas” liberales.

Michel Husson es economista. Tiene una página web (hussonet.free.fr) en la que pueden encontrarse una selección de sus escritos y opiniones.
